

Jueves 6 de diciembre del 2001

• TRANSICIONES •

Víctor Alejandro Espinoza Valle



¿Nueva relación?

En anteriores colaboraciones señalaba que el talón de Aquiles del PAN como Gobierno es su relación con la sociedad. Para este partido la verdadera política social es no tener política social. Sin embargo, ese vacío ha sido cubierto a partir de las iniciativas de los ejecutivos en turno. Esto es válido a nivel nacional y ha quedado plenamente demostrado en la dimensión local. Las administraciones estatales panistas que iniciaron en 1989 han dependido del estilo personal de gobernar. Quien tuvo más tiempo para aprender fue Ernesto Ruffo Appel; hacia mediados de su gestión entabló relaciones con grupos intermedios de la sociedad y con líderes reconvertidos o "modernos", quienes visualizaron en el cambio la posibilidad de adaptarse para no desaparecer y seguir jugando un rol influyente. El Gobierno de Héctor Terán Terán no tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de la necesidad de toda administración pública de mantener relaciones con la sociedad a través de las redes sociales. El Gobierno se perdió en la indefinición y en las debilidades del Ejecutivo. Entre 1998 y 2001, el gobernador Alejandro González Alcocer decidió mantener su administración al margen de la "influencia social". Su distanciamiento con los grupos sociales e intermedios fue evidente cuando no tensa o francamente encontrada. El enfrentamiento más estridente fue con el sector empresarial.

El reto para la administración estatal que inicia es el de definir claramente cómo quiere que marche su relación o interacción con la sociedad. Es evidente que mantener la distancia es una medida poco redituable en todos los sentidos. Además, las circunstancias exógenas no serán nada favorables para el Gobierno de Eugenio Elorduy. La crisis de la economía mundial, que ya el presidente Vicente Fox ha definido como la "peor de los últimos 20 años", obliga a medidas de austeridad que reducirán el gasto público. Nuestra particular situación fronteriza que nos hace tan interdependientes con el exterior, no contemplan la reversión de las tendencias contraccionistas en las exportaciones regionales. El reto, pues, es darle cauce a la participación ciudadana. Como se sabe, los gobiernos tienen la necesidad de tomar constantemente el pulso a las demandas sociales. En un contexto democrático, la gobernabilidad es la capacidad de una administración pública de responder satisfactoriamente a las necesidades de los ciudadanos. Esto es posible a través de la incorporación de las propuestas ciudadanas en el diseño de las políticas públicas. Por el contrario, la ingobernabilidad es la pérdida de capacidad de solución a la problemática social.

Si definimos al sistema político en Baja California como democrático, existe la necesidad (y urgencia) de que el Gobierno que inicia tome en cuenta los requerimientos de la sociedad; ello será posible a través de una interlocución efectiva Gobierno-ciudadanos. Parecen existir tres vías conocidas: A través de la refuncionalización de las instancias de participación, de manera destacada el Coplade y los Copladem (Comité de Planeación de Desarrollo Estatal y Municipal); a través de las instancias de representación política local, de manera particular las regidurías y, finalmente, sacando al Gobierno de las oficinas, visiblemente el recién relanzado "Miércoles ciudadano". Las relaciones informales se pueden generar a través de nuevas formas de corporativismo social, que es una vía necesaria en todos los casos de experiencias democráticas exitosas. Si bien es muy temprano para evaluar resultados a un mes del inicio del nuevo Gobierno, lo único que conocemos es la inauguración de los miércoles ciudadanos y que en el caso de Tijuana, parece haber iniciado con nula participación social. Es difícil que sólo a través de esta vía la sociedad se sienta realmente tomada en cuenta para la resolución de sus necesidades más apremiantes. Para la confección de políticas públicas se ha convocado a participar en foros públicos y a enviar propuestas a fin de integrar el nuevo Plan Estatal de Desarrollo. El reto es darle continuidad a los trabajos de planeación y convertir al Coplade en un espacio de participación con representatividad.

Lo que ha ocurrido es que los gobiernos desdeñan estas instancias y a sus reuniones y comisiones asisten funcionarios con escasa capacidad de decisión. Nadie hace caso o atiende lo que ahí se discute.

Estamos a la espera de conocer cuáles serán los rumbos que tome la relación entre los ciudadanos y el nuevo Gobierno. En los últimos meses hemos sido testigos de que la realidad se impone a la política. Los gobiernos emanados del PAN tienen necesidad de contar con políticas públicas explícitas, aunque el partido aún se encuentre rezagado en el renglón de la política social. Si quiere seguir contando con los consensos deberá trabajar en su definición.

El autor es politólogo, secretario general académico de El Colegio de la Frontera Norte.